Cascos insinúa que González es el «cerebro» de los GAL y le acusa de desacreditar a los jueces

«Populares» y socialistas intercambian duras acusaciones en el Congreso

PASCUAL GARCIA

MADRID.— El clima de crispación y el cruce de insultos y acusaciones entre el Gobierno y el Partido Socialista crece día a día, tal y como quedó ayer demostrado en las declaraciones que dentro y fuera del Congreso realizaron dirigentes socialistas y *populares*.

Francisco Alvarez Cascos, vicepresidente primero del Gobierno, declaró ayer a la Cadena Cope, en respuesta a unas declaraciones de González sobre la existencia de algunos «jueces descerebrados», que en el asunto de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) él se sitúa «inequívocamente del lado de los *descerebrados* y no del lado del *cerebro*, sobre todo cuando ese *cerebro* ha costado 28 víctimas, fruto de 28 asesinatos».

Cascos achacó las descalificaciones de González —que el pasado martes en México comparó las actuaciones para la celebración del primer aniversario de la llegada del PP al Gobierno con los «años triunfales» del franquismo— a su «incapacidad» para hacer críticas concretas y objetivas a la labor de Gobierno.

Alvarez Cascos subrayó que, con sus «descalificaciones», el ex presidente sólo se descalifica a sí mismo.

Pero no fue ésta la única reacción de los *populares* a las acusaciones vertidas la víspera por el secretario general del Partido Socialista. Así, José María Robles Fraga, portavoz *popular* de Asuntos Exteriores, criticó que Felipe González aproveche su viaje a México para atacar la labor de gobierno del PP y denunciar que ha supuesto un retroceso en el terreno de las libertades.

Agregó que resulta «curiosa» la manera en que el líder socialista ejerce su labor de jefe de la oposición. «Nunca está en España, su escaño siempre está vacío y da la impresión de que su cabeza también está vacía», señaló.

UN FORO INAPROPIADO.— Tampoco se pueden calificar de «suaves» las declaraciones del coordinador del Grupo Popular, Rafael Hernando, que recordó a González que los únicos que pueden entender que ha habido un retroceso de las libertades en España son «los corruptos del régimen felipista».

No menos contundente fue el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, quien reprochó a González haber denunciado en México un retroceso de las libertades en nuestro país. «Estas palabras», aseguró el máximo responsable de la seguridad del Estado, «no son, precisamente, un ejercicio de patriotismo, especialmente cuando se hacen en un país utilizado por ETA como lugar de reserva».

Esta retahíla de descalificaciones tuvo cumplida respuesta por parte de los parlamentarios socialistas, desde cuyas filas se pronunciaron ayer durísimas acusaciones contra el Gobierno y el partido que lo sustenta.

Así, el diputado Alfredo Pérez Rubalcaba acusó al vicepresidente Alvarez Cascos de «utilizar la Justicia para perseguir a enemigos políticos y mediáticos». Rubalcaba, que no se extrañó de que Cascos «apoye a *descerebrados*», denunció que el vicepresidente «utiliza medios judiciales, fiscales y jueces, muy pocos pero significativos, para perseguir a sus enemigos políticos y mediáticos».

Rubalcaba se refirió en otro momento al programa emitido por TVE con motivo del primer año de Aznar en La Moncloa y afirmó que le recordó «a la televisión de Ceacescu».



LARRY MANGINO

Alvarez Cascos con el diputado socialista Solé-Tura, ayer en el Congreso.

El también ex ministro y diputado socialista Juan Alberto Belloch calificó de «impresentables» las declaraciones del *número dos* del Ejecutivo.

COMENTARIOS «RIDICULOS».— El dirigente socialista, que calificó de calumniosas las palabras de Cascos, se congratuló porque, cuando menos, reconocen que hay «*descerebrados* en todos los órdenes». «De hecho», añadió, «los hay en la política, en la clase mediática y en todas las partes». Según Belloch, este tipo de comentarios, que en su opinión ya eran censurables cuando se hacían desde la oposición, resultan «ridículos» cuando se formulan desde la responsabilidad de Gobierno.

También durante la jornada de ayer, y al margen de las declaraciones de Cascos, los socialistas acusaron a los *populares*, por ejemplo, de «golpismo judicial», tal y como hizo el diputado Alvaro Cuesta al referirse a la crisis en la Audiencia Nacional, o, en palabras de la diputada María Teresa Fernández de la Vega, de «poner en la calle a los violadores y encarcelar a los médicos que ayudan a las mujeres a abortar».

Enfrentamiento Gobierno-PSOE por la Fiscalía

La ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, anunció ayer en el Congreso, durante la sesión de control al Ejecutivo, que el Consejo Fiscal se reunirá la próxima semana para tomar una decisión sobre la plaza vacante de fiscal jefe de la Audiencia Nacional, y que tras esta reunión propondrá a uno de los tres candidatos a esta plaza al Consejo de Ministros. Los candidatos son Eduardo Fungairiño, Francisco Javier Cebrián y Mariano Fernández Bermejo.

Margarita Mariscal fue sometida, una semana más, a las durísimas críticas del Grupo Socialita. Ayer, el portavoz socialista en materia de Justicia, Juan Alberto Belloch, aprovechó una pregunta sobre la fecha en la que se va a cubrir la plaza de fiscal jefe de la Audiencia para acusar al Gobierno de haber destituido a su anterior titular, José Aranda, por haberse querellado contra Mario Conde. Además, denunció la responsabilidad política del Gobierno al haber creado las condiciones, rebajando e incluso desestimando las sanciones contra los «fiscales amotinados», para que ningún fiscal quiera optar a ese puesto. Belloch fue todavía un paso más allá y denunció que ha sido la intervención en este asunto del diario EL MUNDO la que ha provocado la caída en desgracia del actual fiscal general del Estado, Ortíz Urculo.

Por su parte, el también diputado socialista Alvaro Cuesta llegó a calificar de «golpismo judicial» la actitud del Ministerio de Justicia en la crisis de la Audiencia. Cuesta denunció que los «fiscales amotinados» son «sumisos» a los «intereses revanchistas del Gobierno» y forman parte de un «entramado» en el que también concurren algunos magistrados y fiscales además de los «*hooligans* mediáticos del coro del Ejecutivo».

Sobre el futuro de la fiscal María Dolores Márquez de Prado, la ministra de Justicia manifestó ayer: «La adoptaré cuando la tenga que adoptar» y que esta resolución será «clara y pública».

Acebes acusa a González de mentir y carecer de principios

F. J. S.

MADRID.— El coordinador general del PP, Angel Acebes, acusó ayer a Felipe González de mentir repetidamente para causar daño al rival político. A su juicio, el secretario general del PSOE mintió cuando acusó al PP de haber recibido dinero de Televisa y volvió a mentir el martes cuando aseguró que todo se trataba de «una broma».

Acebes, en declaraciones a EL MUNDO, se preguntó ayer «cuántas bromas más» ha gastado González a los españoles y va a seguir gastando, aparte de algunas conocidas como la del doberman del PP, la de advertir que las pensiones corrían peligro, o la de prometer crear puestos de trabajo.

El dirigente *popular* considera «indigno e intolerable» que un líder político se invente que el rival ha cometido un delito y deje que durante semanas se publique en los medios y se extienda la sospecha para acabar diciendo «que se trataba de una broma que se le había ocurrido». En su opinión, González ha demostrado con esto «que carece absolutamente de valores y de principios».

Respecto a las acusaciones de González de que hay una regresión de las libertades, el coordinador del grupo popular del Congreso, Rafael Hernando, señaló que «quienes pueden entender que ha habido un retroceso son algunos individuos que quieren seguir con prácticas de corrupción o espiando a representantes políticos a través de los servicios de inteligencia».

Una ley para proteger a españoles en el extranjero

El vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Alvarez Cascos, anunció ayer que el Ejecutivo está preparando una ley específica destinada a proteger los intereses de los ciudadanos españoles de posibles medidas extraterritoriales que puedan ser aplicadas en otros países.

Cascos contestaba así a las críticas formuladas tanto por Francisco Frutos (IU) como por Francisco Rodríguez (BNG) respecto a la pasividad del Gobierno tras la detención del español Francisco Javier Ferreiro por las autoridades norteamericanas acusado de no respetar el embargo comercial a Cuba.

Cascos, que hizo una exposición de las acciones desarrolladas por las autoridades diplomáticas españolas en este asunto, recordó al diputado gallego que no es posible, como éste solicitaba, que el Gobierno español corra con los gastos de la fianza que solicitan las autoridades estadounidenses al empresario español para su puesta en libertad.

El diputado de IU Francisco Frutos acusó a la Administración de EEUU de utilizar a Francisco Javier Ferreiro como un «rehén» con el que chantajear a la comunidad internacional.

La Generalitat cifra en 60.000 millones de pesetas al año la cantidad necesaria para financiar los servicios sanitarios. **El Gobierno** autonómico depende de los bancos para poder hacer frente a los pagos de la deuda.

El déficit sanitario catalán asciende a 300.000 millones

La sanidad es un lastre importante para las arcas de la Generalitat, cuya deuda acumulada es de 1,5 billones de pesetas

ELIANNE ROS

BARCELONA.— El déficit de la sanidad es uno de los problemas más acuciantes de la Generalitat, cuya deuda global se multiplica cada día que pasa para desesperación del Ejecutivo nacionalista. Los cálculos de la oposición sitúan en 300.000 millones de pesetas el déficit sanitario y elevan a 1,5 billones la deuda acumulada. Unas cifras ante las que la Generalitat guarda silencio. Ayer, Jordi Pujol admitió que su Gobierno no ha querido reconocer a cuánto asciende el déficit sanitario. Los estudios de la oposición revelan hasta que punto la situación es desesperada: de ser una empresa privada la Generalitat estaría en quiebra.

► **El agujero de la sanidad.** El estudio realizado por el PSC a partir del Informe Central de Balances y los datos del Síndic de Greuges (defensor del pueblo) sobre la financiación de la sanidad catalana eleva a 300.000 millones el déficit sanitario. El déficit contable del Servicio Catalán de Salud (los centros traspasados) se sitúa en 190.000 millones, y el de los centros concertados se eleva a 96.000 millones. A estas cifras cabe añadir el déficit generado en 1996 por ambos conceptos.

► **¿A qué periodo corresponde?** La Generalitat llegó a un acuerdo con el Gobierno central para que se liquidara el déficit sanitario acumulado en el año 1993, coincidiendo con el apoyo de CiU al PSOE. Por tanto, el agujero actual de la sanidad catalana corresponde a los años 1994, 1995 y 1996. Los cálculos de la oposición se han realizado sobre este periodo.

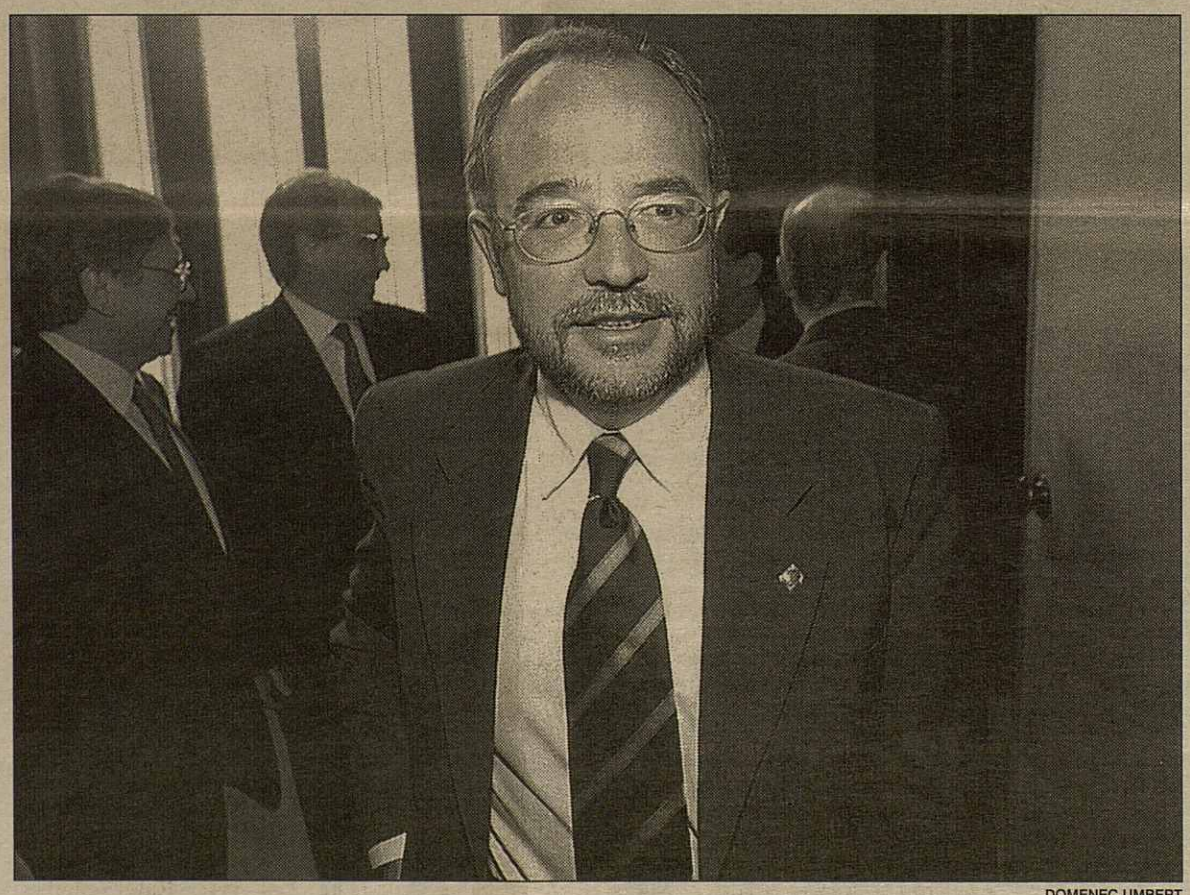
► **Las cifras oficiales.** A pesar del mutismo de la Administración catalana, el Gobierno autonómico ha reconocido una deuda acumulada global de un billón de pesetas. En el campo de la sanidad, admite 128.000 millones de déficit, que corresponden a las cifras oficiales del Servicio Catalán de Salud a finales de 1995. La Generalitat cifra en 60.000 millones de pesetas al año la cantidad necesaria para financiar los servicios sanitarios. Esta suma se corresponde con el 16% (el porcentaje de población que representa Cataluña en relación con el resto del Estado) de los 200.000 millones del déficit sanitario global de las autonomías que tienen traspasada la sanidad.

► **¿Por qué CiU pide una solución global?** Cuando negoció el pacto con el PP, la coalición planteó la cuestión de la financiación sanitaria a nivel global para evitar que se interpretara como una petición mercantilista y ser el blanco de nuevas acusaciones de utilizar su apoyo para expoliar las arcas del Estado. Pretendía también que el PP se concienciara de que no era un problema exclusivo de Cataluña, sino de todas las autonomías del sistema común con la competencia traspasada.

► **¿Por qué tanta prisa?** La Generalitat se encuentra atrapada por los intereses de los créditos que necesita de los bancos para poder hacer frente a los pagos. Para afrontar los gastos de la sanidad tiene una póliza de tesorería de entre 120.000 y 130.000 millones de pesetas que renueva cada año con las consiguientes cargas de los intereses.

► **¿Qué dice el pacto PP-CiU?** El acuerdo suscrito hace un año entre CiU y el PP indica que el Gobierno de José María Aznar «estudiará la revisión definitiva de la financiación sanitaria, atendiendo a la insuficiencia de recursos y a las acotaciones de racionalización que se adopten».

Indica que se respetarán los precedentes establecidos con el Gobierno central respecto a los pacientes desplazados. «La evaluación de los pacientes desplazados se incrementará a partir del año 1997 al ritmo del resto de la financiación sanitaria [PIB nominal]», puntualiza el pacto. Y añade que se respetará el compromiso según el cual a Cataluña le corresponde el 15,99% de la financiación que se acuerde.



DOMENEC UMBERT

El consejero de Sanidad de la Generalitat, Eduard Rius, ayer, en el Parlamento catalán.

La asignatura pendiente del pacto

La sanidad es la principal asignatura pendiente del pacto suscrito entre CiU y el PP. El primero en hacerse realidad fue el de la financiación autonómica basada en la cesión del 30% del IRPF sin topes y con capacidad normativa. Este sistema estará vigente hasta el 2001 y afecta a las comunidades autónomas de régimen común.

Pasar del 15% al 30% fue la piedra angular de la negociación, puesto que el compromiso sobre la sanidad es más ambiguo. El pacto compromete al Gobierno a «estudiar la revisión definitiva de la financiación sanitaria».

También se han cubierto los compromisos adquiridos para suprimir la figura de los gobernadores civiles (la nueva LOFAGE entró en vigor el lunes), para el despliegue de los Mossos d'Esquadra y el traspaso de las competencias sobre el tráfico, la reducción del IVA de las autopistas catalanas se aplicará en septiembre y la supresión del servicio militar está en marcha.

Quedan pendientes el traspaso del Inem, retrasado por parte de CiU para intentar obtener competencias sobre políticas pasivas cuando el pacto se limitaba a las activas. Todo parece indicar que el acuerdo es inminente y que el traspaso de las oficinas del Inem se hará oficial en el transcurso de este mes. También avanzadas, aunque en periodo de negociación, se encuentran la reforma de las leyes de Costas, del Suelo, y de Puertos. Esta última legislación registra problemas para alcanzar un acuerdo entre nacionalistas y «populares» a causa de las tarifas de los puertos, puesto que CiU quiere que sea la Administración autónoma la que los fije.

Matas busca apoyo al nuevo régimen fiscal de Baleares

JAVIER DE BENITO

MADRID.— El presidente del Gobierno balear, Jaume Matas, del PP, se entrevistará el próximo día 30 de mayo con el presidente de la Generalitat catalana, Jordi Pujol, con el objetivo de que Convergència i Unió apoye el Régimen Económico y Fiscal Especial para Baleares. El proyecto promovido por el Ejecutivo de las islas fue admitido a consideración por parte del Congreso de los Diputados el martes.

Matas indicó que «durante este mes mantendremos contactos con Coalición Canaria, Partido Popular y Convergència i Unió, al ser las tres formaciones que nos pueden apoyar para conseguir medidas que compensen los costes de la insularidad». Además, se mostró convencido de que «el Congreso aprobará una ley que reconozca por primera vez en 300 años el perjuicio que comporta la insularidad».

El presidente balear viajó ayer a las Islas Canarias donde tratará de conseguir el mismo apoyo de Coalición Canaria. Matas no concretó cuál será la estrategia a seguir ante el Ejecutivo canario, que inicialmente critica la posibilidad de que Baleares obtenga compensaciones económicas y fiscales comparables a las que disfruta la Comunidad Autónoma de Canarias.

El presidente del Gobierno balear reiteró ayer su petición de apoyo al PSOE a este proyecto, «ya que no podemos arriesgarnos a que, de darse un cambio en el Gobierno de la Nación, la ley pueda verse afectada». Por ello, Matas abogó por «garantizar la estabilidad y perdurabilidad» de la ley.

